

Perú: crisis política permanente y nuevas protestas sociales	Título
Pajuelo Teves, Ramón - Autor/a	Autor(es)
OSAL, Observatorio Social de América Latina (año V no. 14 may-ago 2004)	En:
Buenos Aires	Lugar
CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales	Editorial/Editor
2004	Fecha
	Colección
Crisis política; Protestas sociales; Peru;	Temas
Artículo	Tipo de documento
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/osal/20110307061339/5Pajuelo.pdf	URL
Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.0 Genérica http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.es	Licencia

Seguí buscando en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO

<http://biblioteca.clacso.edu.ar>

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)

Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO)

Latin American Council of Social Sciences (CLACSO)

www.clacso.edu.ar



Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Conselho Latino-americano de Ciências Sociais
Latin American Council of Social Sciences



Perú: crisis política permanente y nuevas protestas sociales¹

Ramón Pajuelo Teves*

* *Investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).*

Durante la última década, los movimientos sociales han vuelto a ocupar un lugar importante en la agenda temática de las ciencias sociales, tanto en América Latina como a nivel más amplio. Las razones de dicho redescubrimiento, obviamente, no son meramente académicas. Responden sobre todo a la necesidad de visibilizar su importancia política. En un escenario definido por las transformaciones post-guerra fría del poder global y el capitalismo neoliberal, la emergencia de nuevos movimientos sociales (y nuevas formas de protesta asociadas a ellos) parece mostrar nada menos que la vigencia y renovación de las luchas anticapitalistas.

En la base de este nuevo ciclo de luchas contra el capitalismo pareciera hallarse un amplio proceso de movilización social que se despliega a escala planetaria. Justamente una de sus expresiones, sin duda la más famosa, es el llamado movimiento anti-globalización. Este proceso parece evidenciar aquello que es ocultado por el discurso triunfante de la globalización neoliberal: la acen-

tuación de las desigualdades sociales, el cambio e intensificación de las formas de explotación y dominación, los reacomodos de los bloques de poder regional y local, la crisis del neoliberalismo, y la reproducción de nuevas formas de exclusión y discriminación.

En dicho contexto, desde América Latina se viene desarrollando actualmente un fructífero debate en torno a la ubicación de la región en el nuevo escenario global. Esta discusión abarca temas como la colonialidad del poder, el eurocentrismo, los saberes alternativos, las modernidades periféricas, los retos de la diversidad cultural, entre otros². También se ha retomado el tema de los movimientos sociales³. Justamente, uno de los ejemplos más notables de dicha vuelta sobre los movimientos sociales es la opción de CLACSO por hacer girar en gran medida sus actividades –sobre todo durante los últimos años– en torno al seguimiento de sus luchas y el debate de sus perspectivas⁴.

La importancia política de volver a fijar la mirada sobre los movimientos sociales no ha anulado la búsqueda de nuevos derroteros cognoscitivos. Es justamente en este aspecto que pueden mencionarse los principales alcances y debilidades del retorno de los movimientos sociales como objeto prioritario de conocimiento social. Sin embargo, como suele ocurrir, la urgencia de lo novedoso resulta contraproducente respecto de la necesidad de rigurosidad conceptual. A costa de “abrir” el concepto de movimiento social para nombrar de ese modo a toda forma de movilización social o –tan grave como ello– a cualquier manifestación de resistencia en cualquiera de los ámbitos de la realidad, hemos terminado en una imprecisión que conduce a equívocos teórica y políticamente inaceptables⁵.

Este texto desea ilustrar dicha situación, pero no a través de una discusión conceptual, sino mediante el examen de la situación actual de la movilización social en el Perú. Se busca mostrar que el período de transición democrá-

“A pesar de una cierta recuperación de las posibilidades de politización de intereses, expresada en algunas organizaciones y luchas recientes, predomina aún la crisis de representación política, así como la ausencia de un horizonte programático alternativo”

tica ha implicado el afloramiento de nuevas y múltiples formas de protesta, las cuales expresan conflictos incubados durante el fujimorismo neoliberal de la década pasada, que se articulan con procesos anteriores de exclusión, dominación y protesta. Sin embargo, se trata de una movilización que se halla lejos de constituir un movimiento social, en la medida en que aún persisten la desarticulación y fragmentación de los intereses sociales y del tejido social, sobre todo entre los sectores populares. A pesar de una cierta recuperación de las posibilidades de politización de intereses, expresada en algunas organizaciones y luchas recientes, predomina aún la crisis de representación política, así como la ausencia de un horizonte programático alternativo. La norma sigue siendo la debilidad política de las luchas sociales, la dificultad de su articulación y la ausencia de actores políticos plenamente organizados. El ejemplo peruano –no obstante su peculiaridad– puede permitir una mirada más cautelosa en términos académicos, y más útil en términos políticos, sobre la situación de los movimientos sociales en el resto de América Latina.

Las (imposibles) promesas de la transición democrática

En el Perú, desde fines del año 2000, con la caída del régimen fujimorista y la apertura del período de transición democrática, parecían abrirse las posibilidades para el desarrollo de un amplio proceso de democratización social y política. A ese interés respondió el inicio de la reforma del estado, entre cuyos componentes más significativos se hallan los procesos de regionalización y descentralización que vienen implementándose actualmente. Asimismo, la creación de una Comisión de la Verdad encargada de esclarecer las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado iniciado en 1980. También la decisión de proceder a la reforma de las Fuerzas Armadas, las cuales durante toda la década del '90 constituyeron el soporte del gobierno autoritario de Alberto Fujimori y de su red de corrupción (la más extensa y escandalosa mafia política de toda la historia peruana). Se impulsó, asimismo, el funcionamiento de un espacio de diálogo entre las diversas fuerzas políticas y sociales, denominado Acuerdo Nacional, y se introdujo en la legislación el uso de mecanismos de concertación y participación en los distintos niveles de gobierno.

No sólo parecía posible, sino sobre todo necesario, dejar atrás las décadas de violencia y autoritarismo neoliberal, forjando bases sólidas para un país realmente distanciado de la vieja *sociedad de señores* heredada de la larga historia colonial y republicana. Sociedad cuyos tentáculos se extienden a través del centralismo, el racismo, la ausencia de una ciudadanía plena para el conjunto de los peruanos y la extrema desigualdad (tramada con todo lo anterior) que organizan la vida cotidiana, así como el poder material y simbólico estatal y no estatal.

El *aggiornamento* neoliberal de la sociedad

Sobre el terreno abonado por el impacto de la violencia, así como por la severa crisis económica desatada desde mediados de la década del '70, durante toda la década del '90 fue posible la imposición, desde el estado, de un nuevo ciclo modernizador de rostro neoliberal y autoritario. La forma política de esta modernización fue el llamado *fujimorismo*, cuya base fue una alianza de poder entre la tecnoburocracia estatal, las élites empresariales y las Fuerzas Armadas, bajo la sombra ideológica del neoliberalismo⁶.

Pero el fujimorismo, como toda dictadura, no fue sólo un proyecto para la administración del estado. Requirió también de la implementación de mecanismos efectivos de control sobre el conjunto de la sociedad. Ello tuvo una doble faz: de un lado, se dio impulso a un proceso de "desarrollo" y "modernización" sustentado en la apertura al libre mercado y la ejecución de programas dirigidos a cubrir las expectativas sociales (mediante la ejecución de obras de infraestructura, tales como carreteras, puentes o escuelas, y de programas sociales de alivio a la pobreza a través de organismos creados para tal fin). Pero en realidad, bajo el espejismo fujimorista, la pobreza se expandió al punto de convertir al país en uno de los más pobres y desiguales de América Latina. En segundo lugar, de manera sistemática, se ejecutaron acciones destinadas a fragmentar el tejido social existente, utilizando para ello el pretexto de la lucha contra la subversión. La existencia de comandos militares y paramilitares de aniquilamiento –como el famoso Grupo Colina– fue sólo la punta del iceberg de una política sistemáticamente implementada, a lo largo de la década, para destrozar toda forma de tejido social organizado, especialmente entre los sectores populares. Ello incluyó formas de represión abierta masiva o selectiva, operaciones de control preventivo, militarización cotidiana y diversas formas de manejo psicosocial de masas.

En lo que respecta a los partidos políticos, su crisis de representatividad y de inserción social fue profundizada en gran medida por el impacto de la neoliberalización social y estatal. La mayoría colapsó, y los que sobrevivieron fueron rebasados en las urnas por diversos movimientos independientes que cosecharon el descrédito de los partidos y de la propia política. El rechazo a los partidos y a la política, denominada como "vieja politiquería", también fue alentado sistemáticamente desde el estado durante la "década de la antipolítica" (Degregori, 2001) que significó el fujimorismo. Las estructuras organizativas y los principios ideológicos de los partidos fueron reemplazados por una concepción sumamente pragmática de la participación política, al margen de cualquier institucionalidad y motivada sobre todo por la búsqueda de beneficios personales y grupales.

De ese modo, se consolidó un proceso de fragmentación y desarticulación social sin precedentes en la historia peruana. Fragmentación y desarticulación que han licuado los

intereses sociales populares, afectando la posibilidad de representación política efectiva. De allí que al hablar del caso peruano no sólo sea necesario hablar de una crisis de representación política, sino más bien de una crisis de representabilidad⁷.

Todo esto se relaciona con el éxito del neoliberalismo y el fujimorismo. A diferencia de lo ocurrido en otros países andinos, como Ecuador y Bolivia, la imposición de las políticas neoliberales no generó ninguna forma de resistencia social organizada en el Perú. El factor que allanó el camino al proyecto neoliberal fue la desarticulación del tejido social y de los intereses de los sectores populares, como efecto de la acción combinada de la crisis económica, la violencia política y la aplicación de las políticas neoliberales. Durante el tiempo del fujimorismo, el lado inverso del exitoso proceso de neoliberalización de la sociedad y del estado fue la destrucción de las organizaciones y movimientos sociales, así como la disminución del grado de representabilidad política de las capas populares. El resultado fue un verdadero *aggiornamento* neoliberal de la sociedad⁸.



© Diario La República

El tímido rebrote de las protestas sociales durante el fin del fujimorismo

Desde la aplicación del “fujishock” neoliberal de agosto de 1990⁹, las protestas y movilizaciones desaparecieron de la escena peruana como por arte de magia. Durante

[AÑO V N° 14 MAYO-AGOSTO 2004]

OSAL 55

todo el primer gobierno de Fujimori (1990-1995), las excepciones a esta situación fueron muy pocas. Sin embargo, se comenzó a notar un ligero cambio desde mediados de la década. El primer indicador de dicho cambio fue la reacción provocada por la promulgación de la denominada Ley de Amnistía en junio de 1995. La indignación ante dicha medida –que exculpaba a los militares autores de violaciones a los derechos humanos durante la guerra interna– fue sumamente amplia¹⁰. Dos años después, en 1997, reaparecieron los estudiantes universitarios en escena mediante la realización de múltiples marchas y manifestaciones en oposición al régimen, al cual comenzaron a tildar públicamente como una dictadura. Una capa generacional de jóvenes que no habían elegido a Fujimori en las urnas, y que prácticamente no habían conocido otro gobierno, emergió así a la vida política a través de la formación de una multiplicidad de organizaciones (sobre todo asociaciones, colectivos y grupos estudiantiles).

El segundo factor que comenzó a cambiar el clima de pasividad social fue el descontento de la población residente en las regiones. Ante la acentuación del centralismo limeño por parte del gobierno, comenzó a manifestarse un sentimiento de rechazo que se expresó a través de la formación de diversos Frentes Regionales. Durante los últimos años del régimen, dichos Frentes Regionales constituyeron la principal oposición a los planes reeleccionistas de Fujimori. A través de la convocatoria a paros regionales, marchas y movilizaciones de protesta, lograron generar un clima creciente de rechazo a la continuidad del fujimorismo. El más notorio de ellos fue el Frente Cívico de Loreto, que logró convertirse en un efectivo articulador del descontento político de su región gracias a la existencia de un amplio sentimiento contrario a la firma del tratado de paz con el Ecuador. Posteriormente dicho Frente Cívico logró articular una plataforma antineoliberal y antidictatorial, pero sin dejar el trasnochado nacionalismo contrario a la paz con el Ecuador.

“Una capa generacional de jóvenes que no habían elegido a Fujimori en las urnas, y que prácticamente no habían conocido otro gobierno, emergió así a la vida política a través de la formación de una multiplicidad de organizaciones (sobre todo asociaciones, colectivos y grupos estudiantiles)”

Del resto de Frentes Regionales se destacaron sobre todo dos: el Frente Amplio de Arequipa y el Frente Regional del Cusco. Ambos lograron desarrollar importantes protestas e incluso tuvieron cierta presencia política a nivel nacional. En el mejor momento se llegó a conformar una Coordinadora Nacional de Frentes Regionales, pero los límites de esta fueron también los de los propios Frentes: el divisionismo y la carencia de sostenibilidad, más allá del limitado tiempo de duración de las protestas.

A pesar de su falta de articulación y organicidad, las luchas desarrolladas por estudiantes, Frentes Regionales y otros sectores fueron importantes para alimentar el amplio sentimiento de rechazo cívico a la dictadura. Este se hizo notar al saberse los planes reeleccionistas de Fujimori. El personaje que canalizó el creciente descontento con el régimen fue el candidato de oposición, Alejandro Toledo, quien debido a su humilde origen social y a su discurso electoral basado en las promesas de trabajo, bienestar y reconocimiento de las regiones, logró ganarse el apoyo de amplios sectores de la población.

Pero Fujimori impuso su reelección a través de un escandaloso fraude en las elecciones. El 28 de julio, día de su juramentación como presidente por tercera vez consecutiva, se realizó la denominada Marcha de los Cuatro Suyos convocada por Alejandro Toledo. Fue la manifestación más contundente del período y la muestra más clara del absoluto desgaste del régimen. Lo que siguió después fue una acelerada sucesión de acontecimientos, que en sólo cuatro meses condujeron al espectacular desplome del régimen. Esto ocurrió sobre todo debido a la agudización de las contradicciones existentes al interior del fujimorismo. El hecho que precipitó las cosas fue la revelación, en septiembre de 2000, de un video que mostraba al asesor Vladimiro Montesinos –verdadero Rasputín de la dictadura fujimorista– comprando con dólares contantes y sonantes los favores políticos de un congresista de oposición para asegurarse así el control político del Parlamento. Durante dos meses más Fujimori intentó aparentar distancia respecto a su poderoso asesor, pero las revelaciones en torno al profundo carácter corrupto de su gobierno, su absoluta ilegitimidad en todo el país, y las crecientes presiones internacionales, lo empujaron a convocar a nuevas elecciones, anunciando que no se volvería a postular. Sin embargo, prefirió escapar al Japón y fingir una renuncia mediante un fax enviado el 20 de noviembre de 2000.

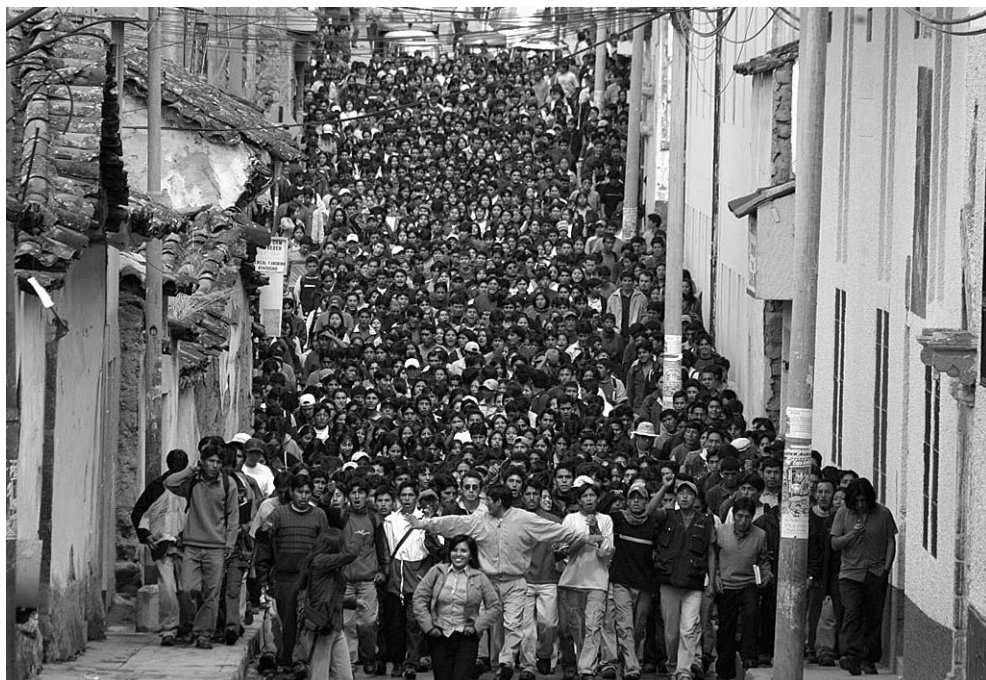
El destape de las nuevas protestas sociales durante la transición democrática

Al iniciarse la transición democrática, la situación predominante era de una extrema fragilidad social y política. En términos sociales prevalecían la debilidad del tejido organizativo y la desarticulación de demandas e intereses. Los conflictos sociales –eficazmente contenidos durante el fujimorismo– parecían opacos, aislados y hasta inexistentes. En

términos políticos, resultaba evidente la permanencia de la crisis de representación de los partidos, los cuales parecían flotar sobre sí mismos, sin mayor arraigo con la sociedad que (teóricamente) debían representar. Además, los actores políticos mantenían su debilidad orgánica e ideológica¹¹. La elección presidencial y de congresistas de 2001 mostró la ausencia de los partidos políticos y la prolongación de la informalidad y el pragmatismo predominantes durante el fujimorismo¹².

Durante los ocho meses del breve gobierno de transición de Valentín Paniagua (noviembre de 2000 a julio de 2001), el clima de movilización social de los últimos años del fujimorismo se diluyó casi completamente. La situación dio un giro desde los primeros meses del gobierno de Alejandro Toledo. Paulatinamente, a lo largo y ancho del territorio nacional fueron incrementándose las protestas y reclamos, protagonizados por sectores muy diversos: ex-trabajadores estatales despedidos durante el fujimorismo, jubilados, usuarios de servicios públicos, agricultores, microempresarios, transportistas, comunidades campesinas e incluso amas de casa. El contexto de transición democrática brindó un escenario propicio para el “destape” de muchas demandas y conflictos incubados en el curso de la implementación del neoliberalismo, pero eficazmente contenidos por el fujimorismo.

Previendo que la movilización social podía ir en aumento, el gobierno optó por la vía del endurecimiento frente a las protestas. Bajo el pretexto de que a toda costa se debía preservar la “paz social” a fin de mantener la transición y la estabilidad económica para la



inversión, se llegó al extremo de penalizar las protestas sociales. De esa manera, resultaba claro que la “mano dura” anunciada por el ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, en septiembre de 2001, equivalía a una auténtica fujimorización del manejo de los asuntos concernientes al orden público.

El verdadero estallido social llegó con el denominado “arequipazo” de junio de 2002. Aunque durante los meses previos también hubo algunas protestas violentas¹³, fue la oposición del pueblo de Arequipa a la continuidad de las privatizaciones lo que constituyó un verdadero punto de quiebre de la movilización social. La manzana de la discordia fue la privatización de la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa (EGASA) y de la Empresa de Generación Eléctrica del Sur (EGESUR). El 14 de junio diversos gremios locales desconocieron la autoridad del presidente de la República, convocando a la población a protestar para evitar dichas privatizaciones. Durante los días siguientes, las calles de Arequipa fueron escenario de amplias movilizaciones, así como de graves enfrentamientos con las fuerzas del orden que dejaron como saldo un muerto y más de un centenar de heridos. El gobierno decretó el estado de emergencia por 30 días en la región, encargando a las Fuerzas Armadas el control del orden público. Pero ello no amainó las protestas, que se extendieron al conjunto de la región. Ante dicha situación, el gobierno no tuvo más opción que dar marcha atrás y suspender la venta de las empresas.

La exitosa protesta de Arequipa fue el primer campanazo de un extendido rechazo a la continuidad de las políticas neoliberales en el país. Asimismo, parecía poner al descubierto la irresoluble tensión existente entre la democracia y el neoliberalismo, cuestionando de esa forma la posibilidad de una transición democrática con continuismo económico.

En mayo de 2003, un año después de los sucesos de Arequipa, el gobierno debió enfrentar la crisis más grave desatada por las protestas sociales. El año se había iniciado con un clima de conflictividad que se expresó en multitud de protestas y reclamos en diversos lugares del país. Una de las más fuertes fue la paralización de los miles de cocalleros ayacuchanos del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE), quienes desarrollaron una huelga en defensa de su derecho a cultivar hoja de coca y en contra de las políticas de erradicación del estado. Como parte de sus protestas, realizaron una marcha a la capital departamental, Huamanga, generándose enfrentamientos con las fuerzas del orden que dejaron el saldo de varios heridos.

Durante el mes de mayo, el clima de conflictividad llegó a su punto más alto. Una escalada de huelgas y protestas puso en jaque al gobierno, generándose una crisis política que tuvo a la declaratoria del estado de emergencia y la salida de los militares a custodiar las calles como uno de sus ingredientes. Las protestas se iniciaron el

día 6 con la huelga de los transportistas de carga y pasajeros que paralizó gran parte de las carreteras, especialmente las del Sur del país. El día 12 de mayo los maestros afiliados en el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación Peruana (SUTEP) iniciaron una huelga nacional indefinida reclamando la mejora de sus salarios. Esta medida resultó sumamente impactante, por tratarse de uno de los gremios más poderosos (agrupa más de 300 mil maestros), y por paralizar los servicios de educación básica en todo el país. Se trató además de una medida que parecía anunciar una recuperación del movimiento popular: después de varios años de crisis e incapacidad de articulación de los intereses magisteriales, el SUTEP lograba ir a una huelga nacional. Ciertamente, en la base de dicha protesta se hallaba un proceso de recuperación gremial acelerado desde el final del fujimorismo. Pero la otra novedad fue la evidente división existente en el gremio. Un sector minoritario extremista, denominado Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución del SUTEP, dirigido por Robert Huaynalaya, hizo su propia convocatoria al paro con una diferencia de días, cuestionando públicamente la legitimidad de Nílvér López, secretario general del gremio. Además, otro pequeño sector anunció su apuesta por la democratización del SUTEP, criticando tanto a la dirigencia oficial como a la fracción extremista. La situación del SUTEP ilustra muy bien la de los gremios y organizaciones sociales subsistentes en el país después del fujimorismo. Reaparecen en escena pública, pero con una enorme debilidad orgánica, incrementada por problemas de legitimidad y serios divisionismos en su interior, lo cual les impide lograr una actuación pública más efectiva¹⁴.

En apoyo a la paralización de los maestros, el 13 de mayo el Frente Patriótico de Loreto realizó una protesta en dicha región. A ello le siguió el inicio de la huelga de los trabajadores del Poder Judicial el 21 de mayo, y la realización de una marcha convocada por la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP) –la más

“El verdadero estallido social llegó con el denominado “arequipazo” de junio de 2002. Aunque durante los meses previos también hubo algunas protestas violentas, fue la oposición del pueblo de Arequipa a la continuidad de las privatizaciones lo que constituyó un verdadero punto de quiebre de la movilización social”

importante organización sindical peruana— el 22 de mayo. Pero la gota que derramó el vaso fue el inicio de un Paro Agrario que, convocado por la Junta Nacional de Usuarios de Riego el día 26 de mayo, logró una amplia convocatoria aunque localizada básicamente a lo largo del eje costero.

El gobierno, jaqueado por las protestas sociales, decidió recurrir el 27 de mayo a la declaratoria del estado de emergencia, con la finalidad de frenar las protestas e impedir las que estaban anunciadas (sobre todo, la huelga de los trabajadores de salud, convocada para ese mismo día). Las Fuerzas Armadas asumieron el control del orden interno en doce de las veintiséis regiones del país, hecho que constituyó una suerte de epítafio de la transición democrática. Sin embargo, contra la previsión del gobierno, ocurrió que la medida extrema de declarar el estado de emergencia y militarizar el control del orden público tuvo el efecto contrario. Las protestas violentas no se hicieron esperar, en franco desacato del estado de emergencia. El día 29, la desmedida represión de los militares en Puno —que dejó un muerto y más de 60 heridos— generó la indignación del país y un amplio cuestionamiento al gobierno. El 3 de junio la CGTP convocó a una Jornada Nacional de Protesta contra la declaratoria de emergencia, la cual obtuvo relativa participación¹⁵. El estado de emergencia se prolongó durante tres semanas más, hasta el 26 de junio.

La protesta social durante el año 2004

Durante el resto del año y los primeros meses de 2004 la situación de inestabilidad social continuó, mientras el país observaba con asombro que la crisis política se volvía permanente. Dos ingredientes que aumentaron la crisis fueron la bajísima popularidad del presidente Toledo y las múltiples denuncias de la prensa sobre casos de corrupción existentes en el gobierno. En varios momentos, las denuncias de la prensa se convirtieron en verdaderos escándalos que rebajaron aún más la popularidad de este.

La situación tuvo su punto más crítico cuando se descubrió, en enero de 2004, que el asesor presidencial César Almeyda había sostenido conversaciones con un miembro de la mafia fujimorista —nada menos que el “cajero” de la misma, el general Oscar Villanueva— con la finalidad de negociar su situación legal. El propio Almeyda señaló que Fernando Olivera —jefe del Frente Independiente Moralizador, partido aliado del gobierno— conocía dichas negociaciones. Los delitos de este asesor, quien había sido jefe del Consejo Nacional de Inteligencia, hicieron recordar la mafia existente durante el fujimorismo: al igual que el asesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos, pero a una escala muchísimo menor, el asesor Almeyda había logrado tejer una red de corrupción desde su alta ubicación en el estado.

Durante los meses posteriores, las denuncias en torno al caso Almeyda no han cesado de producirse, aumentando el descrédito de la administración y el descontento de amplios sectores del país. Asimismo, no han cesado las denuncias contra diversos personajes ligados al gobierno y familiares del presidente. De allí que en diversos momentos la crítica situación de credibilidad y legitimidad del mismo generara rumores respecto a la posibilidad de la renuncia del presidente, la cual incluso fue solicitada por algunos líderes políticos de oposición.

A inicios de año ganó notoriedad la posibilidad de una nueva protesta de la Confederación Nacional de Productores Agrarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (CONPACCP) en Lima, quienes anunciaron la realización en la ciudad de su segundo congreso nacional. Este se realizó de todas maneras, contando con una amplia cobertura periodística, pero en él se ahondaron aún más las divergencias entre las dirigencias de las diferentes cuencas, generándose una división de la Confederación. A pesar de ello, los cocaleros de las cuencas que siguieron perteneciendo a dicha organización realizaron una marcha que llegó a Lima el 21 de abril, permaneciendo por varias semanas sin obtener mayores logros y en una situación de soledad y aislamiento crecientes.

El 26 de abril ocurrió un suceso que mostró la gravedad de la crisis política y las profundas carencias del proceso de institucionalización democrática. Ese día, la población de la localidad de llave¹⁶ asesinó brutalmente a su alcalde, quien sólo tenía un año en el cargo, al que acusaban de cometer actos de corrupción. El país descubrió horrorizado, a través de las escenas del linchamiento del alcalde propaladas por televisión, que miles de campesinos y pobladores aymaras se hallaban movilizados desde hacía tres semanas, exigiendo ser atendidos por las autoridades. Detrás de los hechos se hallaban los errores de la gestión de Cirilo Robles –el alcalde muerto–, pero también el conflicto por el control del poder local y los recursos municipales entre este y su teniente alcalde, Alberto Sandoval. Asimismo, la compleja y conflictiva relación entre el poder estatal –representado por la Municipalidad Provincial– y la población rural, compuesta por campesinos indígenas aymaras.

Uno de los elementos que atizaron el conflicto entre el municipio y los campesinos parece haber sido la variación de las reglas de juego establecidas desde la creación de la provincia en 1991 (las cuales incluían la transferencia de recursos municipales a los centros poblados rurales, que el nuevo alcalde disminuyó). La facción opuesta había logrado canalizar el descontento de la población, sobre todo luego de un frustrado cabildo abierto que terminó en un enfrentamiento en plena plaza de llave el día 2 de abril. Desde entonces, y hasta el desenlace de los acontecimientos, los campesinos tomaron la ciudad exigiendo la renuncia del alcalde, sin lograr mayor atención por parte de las autoridades nacionales.

Sólo con la muerte del alcalde el resto del país centró sus ojos en llave, y entonces distintas autoridades regionales y nacionales trataron de aplacar los ánimos de campesinos y pobladores que seguían movilizados. Sin embargo, las negociaciones resultaron en un estrepitoso fracaso. La población desconoció las disposiciones del Jurado Nacional de Elecciones para el reemplazo del alcalde, y a lo largo de los meses siguientes ha realizado diversas paralizaciones, exigiendo el reconocimiento de un alcalde nombrado por ellos mismos¹⁷.

Los sucesos de llave reflejan, en pequeña escala, la gravedad de la crisis de representación política del país, así como las dificultades del proceso de descentralización implementado como parte de la transición democrática (el cual incluye la creación de las nuevas regiones y la implementación de diversos mecanismos de concertación y participación ciudadana, que no funcionaron en llave). Como se sugiere en un estudio reciente (Degregori, 2004), las instancias del estado simplemente resultan inoperantes frente a la gravedad de la crisis social y política existente en la zona. El telón de fondo de los hechos sigue siendo la situación de pobreza, abandono y falta de reconocimiento percibida por la población ante un estado que no sólo es visto como lejano, sino también como ajeno. El enorme abismo existente entre la realidad cotidiana de llave –teñida por la desigualdad y la exclusión, a pesar de tratarse de un eje de dinamismo económico en la región de Puno– ilustra las persistentes carencias de las formas de construcción de democracia y ciudadanía imperantes aún en el país.

Con posterioridad a los sucesos de llave, dos acontecimientos más han remecido la coyuntura política nacional. El primero de ellos ocurrió en Ayacucho, donde el 1º de julio se desató una violenta asonada popular que incluyó la quema de diversos edificios y dejó el saldo de decenas de heridos. El origen de los hechos fue la convocatoria, el día 21 de junio, a una huelga nacional magisterial por parte del Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución del SUTEP (el sector extremista clasista de dicho gremio al cual nos hemos referido anteriormente). El pretexto de esa medida –que en realidad buscaba la notoriedad política pública de dicho sector– fue el supuesto intento gubernamental de privatización de los servicios educativos. La huelga fue acatada solamente en algunos lugares donde el Comité tiene ascendencia, como es el caso de Ayacucho. Allí, los maestros en huelga tomaron las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Huamanga –la capital departamental– a fin de presionar al gobierno a atender sus demandas. La madrugada del 1º de julio la policía cometió el error de desalojarlos por la fuerza, generándose un enfrentamiento que dejó el saldo de varios heridos. Desde la mañana el centro de la ciudad se convirtió en un auténtico campo de batalla entre diversos sectores de la población movilizada y la policía, la cual resultó incapaz de detener los actos de vandalismo y violencia. El blanco de la ira popular fue el gobierno regional, que fue saqueado e incendiado, al igual que otros edificios y negocios.

El gobierno reaccionó anunciando que se trataba de una protesta generada por Sendero Luminoso, y que no permitiría el regreso del terrorismo en el país. Ante ello, durante los días siguientes, diversos sectores de la población –entre ellos los jóvenes universitarios y los pobladores de los distintos barrios de la ciudad– se movilaron en contra del gobierno exigiendo el respeto a los ayacuchanos, y rechazando el ser tildados de “terroristas”.

El segundo acontecimiento que ha remecido la coyuntura política después de llave ha sido la protesta de la población de Cajamarca –región de la sierra Norte del país– en contra de la explotación minera desarrollada por la empresa Yanacocha, la más importante empresa dedicada a la explotación de oro en el Perú. El día 2 de septiembre, alrededor de 3 mil campesinos de diferentes comunidades tomaron el cerro Quilish, naciente de los principales ríos de la región y además considerado un “apu” o cerro sagrado. Su objetivo era detener las actividades de exploración minera realizadas por la mencionada empresa. El grave enfrentamiento ocurrido con los 300 policías que custodiaban las instalaciones de la minera dejó un saldo de 27 heridos entre campesinos y policías. La furia de los campesinos se dejó notar en la destrucción de las instalaciones y vehículos: unas 30 camionetas de la empresa fueron destrozadas.

Durante los días posteriores los medios de comunicación dieron amplia cobertura a la escalada de acontecimientos, que convirtieron al conflicto inicial entre los campesinos de las comunidades cercanas al cerro Quilish y la empresa Yanacocha en uno mucho más amplio que ha enfrentado al conjunto de la población de Cajamarca con el gobierno. El último paro regional, realizado el 15 de septiembre, fue de tanta contundencia que obligó al gobierno a suspender definitivamente el permiso de exploración del cerro Quilish.

El caso de Cajamarca ilustra el fracaso del modelo neoliberal en satisfacer las necesidades básicas de la población. Resulta notorio el contraste entre la bonanza de las empresas mineras nacionales y transnacionales (las cuales desde inicios de la década pasada se vienen asentando en diversas zonas del país obteniendo gran rentabilidad económica) y la persistente pobreza de las poblaciones locales, básicamente rurales¹⁸. En el fondo de dicha situación se halla la persistencia del gobierno en mantener el modelo neoliberal como marco para la explotación minera, sin tomar en cuenta las necesidades de la población ni los derechos de las comunidades campesinas, reconocidas incluso por la legislación internacional¹⁹.

A modo de breve conclusión

En un artículo publicado hace un año en la revista del OSAL, luego de examinar el resurgimiento de las protestas sociales en el Perú, se concluía que “lo que tenemos es un

‘movimiento social’ agotado en la reivindicación inmediatista, que muestra una serie larga y muy diversa de aspectos a ser resueltos, pero sin alimentar planteamientos políticos capaces de formular una alternativa ante las presiones existentes. En otras palabras, los ‘movimientos sociales’ vienen desarrollándose lejanos y ajenos a la política” (Toche, 2003). Desde entonces, se han sucedido diversos acontecimientos que nos hacen pensar que la situación es mucho más grave y compleja.

Resulta muy difícil hablar de la existencia de un movimiento social, o de varios movimientos sociales en el Perú (incluso entre comillas). A menos que decidamos utilizar dicho concepto para nombrar cualquier tipo de movilización o protesta social. Y en este caso, lo que estaríamos haciendo es incrementar la enorme imprecisión conceptual que acompaña el redescubrimiento de los movimientos sociales²⁰.

Sobre un trasfondo en el cual persisten la desarticulación social y la ausencia de perspectivas e intereses, en el Perú se han desarrollado nuevas formas de movilización y protesta, las cuales expresan cierta recuperación y reconstrucción de las posibilidades de representación política y de movilización social. Sin embargo, se trata de formas de protesta que siguen siendo básicamente precarias, y que no logran generar formas de organización estables. Por el contrario, parecen marcadas por la debilidad, el aislamiento y el divisionismo.

La experiencia peruana de los últimos años no sólo ilustra la grave contradicción existente entre el anhelo de afirmación democrática y la continuidad del neoliberalismo, en la medida en que este reproduce las desigualdades y exclusiones, así como las fuentes de conflictividad social y de violencia. También permite mirar con más cautela el desarrollo de nuevas formas de protesta y movilización social, en un momento en que el conjunto de América Latina, frente a la evidente bancarrota neoliberal, parece buscar nuevas salidas y alternativas (Quijano, 2004).

El colapso del régimen fujimorista a fines del año 2000 abrió paso a un período de transición democrática que transcurrió bajo el signo de la continuidad de la crisis económica y la crisis de representación política. Estos factores incidieron fuertemente sobre las condiciones y posibilidades de la reconstrucción democrática, pero no resultan suficientes para explicar todas las dificultades de esta. A ellos debe agregarse la incapacidad e ineptitud política del régimen para administrar la transición, más aún en la medida en que esta trajo consigo la reaparición de múltiples protestas sociales. Cuatro años después, la transición democrática parece haber llegado a su límite o ha fracasado (Pedraglio y Toche, 2004), en tanto que la reconstrucción de cualquier institucionalidad democrática en el país podría ser mucho más difícil, larga y conflictiva. El abismo persistente entre la bonanza macroeconómica generada al amparo de la expansión neoliberal, y la situación de exclusión de amplios sectores sociales, alimenta en gran medida dicha situación.

Bibliografía

Álvarez, Sonia; Dagnino, Evelina y Escobar, Arturo 1998 *Cultures of politics/Politics of Cultures. Revisioning Latin American Social Movements* (Boulder: Westview Press).

Caretas 1995 (Lima) N° 1368, 22 de junio, "Cuando hace mal olvidar".

Degregori, Carlos Iván 2004 *Ilave: desafío de la gobernabilidad, la democracia participativa y la descentralización* (Lima: Grupo Propuesta Ciudadana) Cuadernos Descentralistas N° 13.

Degregori, Carlos Iván 2001 *La década de la antipolítica. Auge y huida de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos* (Lima: IEP).

Fontaine, Guillaume 2003 *El precio del petróleo. Conflictos socio-ambientales y gobernabilidad en la región amazónica* (Quito: FLACSO-IFEA).

Lander, Edgardo (comp.) 2000 *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas* (Buenos Aires: CLACSO).

Meléndez, Carlos 2003 *Último mapa político. Análisis de los resultados de las elecciones regionales de noviembre del 2002* (Lima: IEP) Documento de trabajo N° 130.

Pajuelo, Ramón y Sandoval, Pablo (comp.) 2004 *Globalización y diversidad cultural: una mirada desde América Latina* (Lima: IEP).

Pedraglio, Santiago y Toche, Eduardo 2004 "La política nuestra de cada día", en *Quehacer* (Lima: DESCO) N° 146, enero-febrero.

Quijano, Aníbal 2004 "El laberinto de América Latina: ¿hay otras salidas?", en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales* (Caracas: Universidad Central de Venezuela) Vol 10, N° 1, enero-abril.

Tanaka, Martín 2004 "La propuesta de la CVR sobre reformas institucionales: ¿Cómo enfrentar el problema de la exclusión social?", en *Cuestión de estado* (Lima: IDS) N° 33/34, marzo.

Toche, Eduardo 2003 "Perú: una democracia sin rumbo", en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 11, mayo-agosto.

Touraine, Alain 1989 *América Latina: política y sociedad* (Madrid: Espasa Calpe).

Notas

1 El presente artículo es una versión resumida del texto que en formato completo puede consultarse en la página web del OSAL <<http://osal.clacso.org>>

2 Se trata de un momento fructífero del pensamiento latinoamericano, el cual viene desarrollándose –al igual que en otras coyunturas históricas de modernización, tales como las décadas finales del siglo XIX o las décadas inmediatamente posteriores a las dos posguerras del siglo XX– en el contexto de intensificación de las interconexiones globales. Véase al respecto Pajuelo y Sandoval (2004); también Lander (2000).

3 Entre los nuevos movimientos sociales surgidos en América Latina en el contexto de globalización, destaca la influencia de los movimientos indígenas del Ecuador y Bolivia, el movimiento zapatista de Chiapas, el movimiento de los sin tierra de Brasil y el movimiento piquetero de Argentina.

4 Una muestra de ello son los diversos números del *OSAL*, y este especial dedicado al tema. Al respecto, es necesario destacar que la acción desplegada por CLACSO a través de sus múltiples actividades constituye una de las políticas de generación y difusión de conocimiento más influyentes en la región. Sin embargo, su influencia prácticamente no ha sido objeto de ninguna reflexión específica.

5 Coincido plenamente con Fontaine (2003), quien señala que un ejemplo de ello es el abordaje cultural de los movimientos sociales realizado por Álvarez, Dagnino y Escobar (1998).

6 En términos económicos, el fujimorismo se inició con la imposición de la política neoliberal por parte del gobierno de Alberto Fujimori, mediante el shock (o “paquetazo”) decretado apenas dos semanas después de asumir el poder, en agosto de 2000. En términos políticos, el inicio del fujimorismo fue el golpe de estado del 5 de abril de 2002, mediante el cual se clausuró el Poder Legislativo y se selló la alianza de poder entre la burocracia fujimorista, los empresarios y los militares.

7 Recientemente, Martín Tanaka (2004) se ha referido a esa ausencia de representabilidad en la política peruana. Su tesis es que dicha situación provendría de la existencia de un amplio sector social –básicamente rural e indígena– que quedó desarticulado de los procesos de modernización de la segunda mitad del siglo XX. Se trataría de un sector que vive, por ello, en una situación permanente de “marginalidad” (y no tanto en la “exclusión” social), por lo cual no logra ser representado políticamente, permaneciendo en una suerte de estado pre-hobbesiano. Esta tesis, sumamente discutible, reproduce el añejo esquema evolucionista y eurocentrista de la teoría de la modernización (según el cual pueden existir sectores “marginales” intocados por el proceso de modernización, equivalente únicamente al desarrollo capitalista y la occidentalización). Además, al reducir la realidad política de los supuestos sectores “marginales” a un estado (también supuesto) de pre-modernidad política, esta lectura oculta la cosas en vez de ayudar a explicarlas.

8 La expresión de esto no fue sólo la desaparición de las protestas sociales, sino también la expansión de un amplio sentido común neoliberal. Hasta ahora, dicho sentido común –una suerte de consenso neoliberal básico incuestionable– sigue siendo predominante en los medios de comunicación y en los debates económicos.

9 Así se denominó al primer paquete neoliberal impuesto por Fujimori –en contra de todas sus promesas electorales– dos semanas después de asumir el gobierno. Como muestra de la brutalidad de la medida, puede mencionarse que el precio de los productos básicos subió entre 300 y 800%.

10 Según una encuesta publicada en la revista *Caretas* (1995) el 87% de la población se oponía a la exculpación de los responsables de casos como La Cantuta y Barrios Altos.

11 Con la sola excepción del APRA.

12 Lo mismo ocurrió con las elecciones regionales y municipales de 2002. Entre los partidos, sólo el APRA logró una importante presencia, pero resultó predominante el peso de los movimientos independientes locales y regionales (ver Meléndez, 2003).

13 Sobre todo la de Puno en reclamo de la construcción de la carretera transoceánica, y la de Iquitos en reclamo de incentivos económicos para las regiones de la Amazonía. Esta fue la más contundente, por lo cual el gobierno se vio obligado a enviar Comisiones de Alto Nivel y establecer algunos incentivos económicos regionales.

14 Otro ejemplo de ello son los gremios agrarios. Antes del fujimorismo existían sólo dos gremios nacionales: la Confederación Campesina del Perú (CCP) y la Confederación Nacional Agraria (CNA). Ahora existen más de veinte, lo cual hace imposible una convocatoria unificada, a pesar de que el gobierno de Toledo ha continuado el abandono estatal del agro iniciado en el fujimorismo.

15 Este ha sido el patrón de las distintas medidas de lucha convocadas por esta central gremial durante los últimos años. Por ello, el interés de este gremio en canalizar el amplio descontento contra el gobierno no ha logrado plena efectividad. La muestra más reciente de ello fue la convocatoria a un Paro Nacional el 18 de julio del presente año.

16 Distrito y capital de la Provincia del Collao, ubicada al Sur del departamento de Puno, muy cerca de la frontera con Bolivia y habitada básicamente por población aymara.

17 Hasta el momento (tercera semana de septiembre) la Municipalidad de Ilave se encuentra cerrada. A las elecciones complementarias a realizarse el 17 de octubre se han presentado once candidatos. Los campesinos, articulados informalmente en un Frente de Defensa Aymara, han anunciado que debe ser elegido su candidato de la denominada "lista única", desconociendo a los demás candidatos independientes y de partidos políticos (los cuales inclusive han sido impedidos de ingresar a algunas comunidades). La situación política de Ilave resulta, pues, francamente incierta.

18 En Cajamarca, durante la última década, el incremento de la minería de oro se ha reflejado en la duplicación de su aporte al PBI nacional —el cual pasó del 1,7% en 1995 al 3% en 2002—, pero la bonanza macroeconómica no ha significado mayores niveles de desarrollo para la mayoría de la población. Por el contrario, el Índice de Desarrollo Humano de Cajamarca disminuyó en el mismo período hasta situar a esta región como la segunda más pobre a nivel nacional.

19 Ello ha conducido a la formación, en 1999, de la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), organización que agrupa a centenares de comunidades y que constituye una de las más importantes organizaciones surgidas últimamente en el país.

20 De acuerdo a la formulación clásica de Touraine (1989), que valdría la pena no olvidar, no toda forma de protesta constituye un movimiento social. Por ser un momento de lucha por el poder en la sociedad, un movimiento social requiere una expresión organizativa e ideológica claramente establecida, y suficientemente fuerte para la disputa del modo de organización social prevaleciente en la sociedad.